



Hay que levantar, unidos, un muro frente al franquismo

Hasta este jueves en que Pedro Sánchez ha sido de nuevo investido como presidente por 179 votos contra 171, el Congreso de los Diputados ha vivido momentos de tensión desconocidos desde la elección, en 1977, de las primeras Cortes después de la muerte de Franco.

Los insultos soeces (tan propios del franquismo), las acusaciones, las calumnias, han sido lo permanente de estos días. Todo ello mientras, desde hace ya 15 días varios miles de franquistas extremos asedian la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz (a la vez que otros intentos menores se han realizado en otras ciudades). En Ferraz se ha podido ver cómo dirigentes de Vox –y alguno del PP– se codeaban con los que cantaban el Cara al Sol, y asistían como si nada pasara a las arengas a un Alzamiento Nacional. Y todo ello amenizado con rezos del rosario “por la salvación de España”, ondear de banderas de Falange y otras con el águila de la dictadura, de esvásticas, de banderas carlistas. Tampoco han faltado los “rojipardos” del Frente Obrero.

Digan lo que digan, no se trata de la “ola derechista” que supuestamente recorre el mundo. Lo que tenemos aquí es el franquismo de siempre, alimentado por las instituciones de la dictadura que los pactos de la Moncloa salvaron y que la amnistía de 1977 perdonó, haciendo de ley de punto final de los crímenes del franquismo. De aquellos barros, estos lodos. Este es el balance real de la política que impusieron entonces al

movimiento obrero y popular las direcciones del PSOE y del PCE, con el apoyo de varios de los partidos soberanistas: el mantenimiento del núcleo nodal de las instituciones franquistas, la aceptación de la Monarquía, el mantenimiento del aparato judicial, incluyendo el TOP (transformado de la noche al día en la Audiencia Nacional), del poder de la Iglesia (incluyendo su subvención a cargo de los presupuestos del Estado), del alto mando del ejército (de donde salen ahora llamamientos golpistas, como hace poco más de un año manifiestos en favor de la “memoria de Franco”) ... y del entramado financiero y las grandes empresas que consiguieron beneficios enormes al calor de la dictadura –con su mano de obra esclava y su corrupción generalizada– y que bajo formas distintas siguen “pegadas” a los ministerios. La no realización de una auténtica ruptura con el régimen franquista lleva hoy a estas consecuencias.

La amnistía como detonante

Todo esto estalla, y no es por casualidad, cuando el gobierno en funciones osa hablar de Amnistía para los perseguidos por el Procès, porque, al margen de la consideración política que nos puedan sugerir Puigdemont u otros (a resaltar que, de los miles de perseguidos y posibles encausados, la mayoría son ciudadanos normales y corrientes, especialmente jóvenes, que participaron en las distintas movilizaciones, cortes de carreteras y bloqueos, o simples

funcionarios públicos, conserjes o profesores que abrieron un colegio para que se pudiera votar,...). De lo que se trata para las instituciones franquistas y sus portavoces políticos, PP y Vox, es que la unidad del aparato de Estado es innegociable, y la persecución organizada por jueces y policías a las órdenes del rey, tras su discurso infame del 3 de octubre de 2017, no puede ser puesta en cuestión.

Lo cual da al combate por la República un doble carácter emancipador: acabar con la lacra franquista protectora de las grandes empresas y acabar con el enfrentamiento entre los pueblos que la Monarquía promueve, o sea, el establecimiento de los principios de la fraternidad entre los pueblos, la necesidad de su derecho a decidir libremente las relaciones entre ellos. Para nosotros, una Unión Libre de Repúblicas soberanas, liberadas de toda opresión y explotación...

La cara ceñuda del monarca al recibir este viernes 17 a Sánchez como nuevo presidente muestra bien que el Borbón sabe bien de qué se trata, y lo que está en juego

¿Qué programa de gobierno?

Las abstracciones y generalidades, aunque no podían ocultar que el consenso con el PP es cada vez más difícil, también pone de manifiesto que el que esto se tradujera en una plataforma política que corresponda a los intereses de los trabajadores y los pueblos queda aún muy lejano

Al lado de la ley de amnistía, cuyos límites



Campaña especial de suscripciones a esta Carta Semanal Apoyo Congreso Mundial Abierto, 5 al 9 diciembre 2023

Si no la recibes, te invitamos a que la recibas cada semana. Si la recibes, te proponemos que suscribas a otros compañeras y compañeros a los que pueda interesar.

La elaboración y envío de esta Carta conlleva algunos gastos. El POSI, que la edita, no tiene ni quiere subvenciones, toda su actividad y sus publicaciones son financiadas exclusivamente por trabajadoras y trabajadores, que quieren apoyar, en este caso, la publicación de la Carta Semanal. Pedimos un apoyo de 5 EUROS al año o lo estimes oportuno. Nuestra cuenta corriente en La Caixa es: ES53 2100 2812 51 0200071314. Indicando: Apoyo Carta Semanal

- Para recibir la Carta envía un correo electrónico a: info@posicuarta.org
- Puedes contactar desde: <http://posicuarta.org/cartasblog/contacto>

son evidentes, y cuya promulgación final está por ver, ante los obstáculos en que se encuentra, y la lucha encarnizada que el franquismo político y el franquismo judicial anuncian contra su aprobación y su posterior aplicación (lo cual muestra que la lucha por una verdadera amnistía está lejos de ser ganada y que esta es una exigencia que debe estar entre las banderas de todas las organizaciones obreras y democráticas, cosa que hoy no sucede de manera plena, y, por tanto, exige una acción determinada).

La agenda social que ha presentado el gobierno está lejos de responder a las necesidades de la clase trabajadora. Retocar algunos aspectos de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy no es derogarlas en su totalidad. Y hacerlo por medio del diálogo social (es decir, con el consentimiento de la Patronal que ya se ha sumado, aunque con algunas excepciones, como el patronal catalana, el coro de protestas contra la amnistía y los acuerdos de gobierno) es una vía cuanto menos incierta.

La disminución de jornada, con aumento de la productividad, y, de nuevo, a través de acuerdos del diálogo social, está lejos también de lo necesario.

La promesa de aumento del SMI y las pensiones según el IPC sin duda son positivas aunque no responden a la totalidad de las reivindicaciones. En particular, la negativa, una vez más, a cumplir la ley y llevar a cabo la auditoría de la caja de la Seguridad Social, supone alimentar el mito de la insostenibilidad de las pensiones públicas y permite que se mantenga la espada de Damocles que pende sobre ellas. Recordemos que la reforma Escrivá deja la llave de futuros recortes en manos de la AIREF.

Especialmente preocupante para el futuro del sistema público de pensiones es la promesa de “gestión vasca de la SS” en un plazo de dos años, que supone un paso hacia la ruptura de la Caja única, paso que no puede, en este momento, ir más allá por el déficit que tendría un sistema separado de pensiones en Euskadi (en 2022, en el País Vasco se gastaron 11.000 millones en pensiones, y se ingresaron sólo 6.900), pero que supone, no obstante, un paso a la privatización.

La transferencia de Rodalies (servicio ferroviario de cercanías) en Catalunya es un plan de trocamiento del servicio. Todos los sin-

dicatos ferroviarios han anunciado movilizaciones en contra, porque no hay garantías de que se vayan a respetar las condiciones sociales de los trabajadores.

Ante un gobierno de hecho frágil, que va a necesitar en cada paso adelante romper la resistencia del franquismo político, religioso, empresarial e institucional, resistencia que no se va poder superar sin el apoyo masivo de los millones que el 23 de julio cerraron el paso con su voto a la victoria electoral que PP y Vox ya saboreaban de antemano, la salida lógica sería preparar, sobre la base de las reivindicaciones, la movilización de la población trabajadora y de los pueblos, una tarea que correspondería de manera natural a los sindicatos. Y no dejarlo todo a la “institucionalidad”.

Del mismo modo, el asedio de las sedes del PSOE, y los ataques a las de Izquierda Unida y Podemos, exige poner al movimiento en estado de alerta.

Cierto es que no estamos en el 36, por más que haya proclamas y analogías, que haya despertado la basura fascista y neonazi, y que, incluso, un grupo de exmilitares llamen al golpe (a este respecto, habría que citar la declaración del colectivo de militares demócratas Anemoi “del silencio cómplice del rey, de la inacción del PSOE y de la actitud presuntamente prevaricadora de la ministra de Defensa, que protege a los ‘fuertes’ y hace callar a los ‘débiles’). Por más que se amparen en atentados como el sufrido por Vidal Cuadras (de oscuras circunstancias y aún más oscura autoría, pero que algunos se precipitaron a comparar con el asesinato de Calvo Sotelo en 1936), pero ante situaciones en que el franquismo levanta cabeza (coreado también por la jerarquía de la Iglesia Católica), y moviliza a sus perros de presa, solo es posible hacer frente con el llamado al estado de alerta y movilización.

Confiar en la policía, que cada día da ejemplos de su manifiesta “blandura” y complacencia con los manifestantes de ultraderecha y que contrasta con su contundencia frente a la movilización obrera y de los pueblos es simplemente suicida.

¿Dónde está ahora la tanqueta que sacaron a pasear en la huelga del metal de Cádiz?

¿Qué hacer?

No podemos olvidar un capítulo central de

la acción y el programa del gobierno, tanto en su etapa “en funciones” como en la futura coalición: el aumento brutal de los gastos militares y el alineamiento y complicidad del gobierno ante la política de la Administración Biden en Ucrania, y también en Palestina (en este último caso, en contradicción abierta con el sentir de la mayoría y en particular de sus bases y electorado).

Estamos en un nuevo periodo de crisis del régimen monárquico, y esto se refleja también en la pérdida de norte que sacude a todos los partidos, a sus militantes y a sus cuadros, empezando por el propio PSOE.

Hay una brecha creciente entre este sector político, entre los que ejercen las labores de representación y la mayoría de trabajadores y jóvenes... que, aunque en muchos casos hayan votado para hacer frente al franquismo, no se sienten mucho más identificados y representados que los millones que optaron por la abstención.

¿Quién representa –por ejemplo– a las decenas de miles de jóvenes que se manifiestan en apoyo a Palestina y que rechazan la complicidad del gobierno con el gobierno genocida de Netanyahu? Sin duda, ese vacío de representación política no es un fenómeno único de nuestro país, pero cada vez son más los que piensan que todas las combinaciones parlamentarias no van a suponer la satisfacción de sus necesidades, aspiraciones y reivindicaciones, y que la confianza en que el parlamento vaya a ser el “muro de contención al franquismo” sólo puede llevar al fracaso. Y que no encuentran dónde y cómo dar expresión organizada a este sentimiento.

Este gobierno está ya enfrentado al dilema siguiente:

- se pliega al aparato de estado y al capital financiero y sigue con una política basada en sus intereses o privilegios
 - responde aunque sea limitadamente a los deseos y reivindicaciones de la mayoría social.
- Nadie puede ser neutral.

Desde nuestro punto de vista, participar en las movilizaciones en curso, promover en el movimiento obrero en las organizaciones la necesidad de levantar las reivindicaciones, es inseparable del combate por agrupar fuerzas en torno a los ejes políticos de emancipación social y democrática, del socialismo, el internacionalismo, contra la guerra, contra el genocidio de Gaza.

Nuestros compromisos...

